

Expediente: **6632/25**

Carátula: **LEGUIZAMON BARAZZUTTI VICTOR MANUEL C/ PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA S/ AMPARO INFORMATIVO / HABEAS DATA**

Unidad Judicial: **OFICINA DE GESTIÓN ASOCIADA CIVIL Y COMERCIAL N° 4**

Tipo Actuación: **FONDO CON FD**

Fecha Depósito: **09/04/2026 - 00:00**

Notificación depositada en el/los domicilio/s digital/es:

27281511535 - LEGUIZAMON BARAZZUTTI, VICTOR MANUEL-ACTOR/A

23260284274 - NEUFROLOGOS ASOCIADOS SRL, -DEMANDADO/A

20248028964 - PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA, -DEMANDADO/A

90000000000 - CENTRO DE REHABILITACION CERET, -DEMANDADO/A

90000000000 - SIR REHABILITACION, -DEMANDADO/A

90000000000 - CIOT CENTRO INTEGRAL DE ORTOPEdia Y TRAUMATOLOGIA, -DEMANDADO/A

1

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL

Juzgado en lo Civil y Comercial Común de la XVI Nominación

Oficina de Gestión Asociada Civil y Comercial N° 4

ACTUACIONES N°: 6632/25



H102346079463

Autos: LEGUIZAMON BARAZZUTTI VICTOR MANUEL c/ PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA s/ AMPARO INFORMATIVO / HABEAS DATA

Expte: 6632/25. Fecha Inicio: 11/11/2025.

San Miguel de Tucumán, 08 de abril de 2026.

Y VISTOS: los autos "LEGUIZAMON BARAZZUTTI VICTOR MANUEL c/ PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA s/ AMPARO INFORMATIVO / HABEAS DATA", que vienen a despacho para resolver, de los que

RESULTA:

I) Que, el 11 de noviembre de 2025, se apersonó el Abog. Marcelo Alejandro Politti, actuando en carácter de apoderado del Sr. Víctor Manuel Leguizamón Barazzutti, DNI N°28877575, e interpuso acción de amparo informativo (Habeas Data) en contra de la firma Prevención ART S.A., CUIT N°30684361917, con domicilio en calle Salta N°614 de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

El objeto de su demanda consiste en obtener el acceso de manera cierta, fehaciente, completa y genuina de los estudios médicos por accidente laboral siniestro y/o legajo N°2351289 y de todo otro

dato referido al actor relativos a estudios pre ocupacionales, estudios médicos periódicos anuales y todo otro dato referido a su persona que consten en sus registros, archivos escritos, electrónicos, informáticos, especialmente aquellos referidos a la intervención médica que tuvo lugar con motivo del accidente laboral sufrido por el actor y oportunamente denunciado. También requiere que se informen los profesionales médicos intervinientes, tratamientos, diagnósticos, patologías, terapias, historias clínicas, imágenes de estudios médicos e informe de estos, y demás condiciones referidas expresamente a la salud de su mandante.

Expone que su representado tuvo respuesta por parte de la demandada ante el requerimiento realizado por medios extrajudiciales (TCL CD 287000069), siendo la información que obra en su poder sumamente importante a los fines de dar tratamiento a los problemas de salud que aún aquejan al accionante, ya que darían más luz a los médicos que actualmente intervienen y así el profesional médico pueda tener un conocimiento global y objetivo acerca del diagnóstico y tratamientos a practicarse a su representado.

Comenta los fundamentos doctrinarios y jurisprudenciales de la competencia del fuero civil para entender en la presente causa; de la legitimación del actor como sujeto titular de datos e información y la legitimación pasiva de las aseguradoras de riesgo de trabajo como administradoras de base de datos, archivos y registros de terceros; y del derecho de acceso a la información, a los cuales me remito.

Respecto de lo hechos, manifiesta que el actor trabajó en relación de dependencia para la firma Veracruz S.A., CUIT N°30679979295, y el 21/05/21 se realizó una prueba de antígenos por síntomas asociados a COVID-19, cuyo resultado fue positivo (siniestro N°2351289).

Relata que la salud del actor se agravó a causa de dicha enfermedad y debió permanecer internado por más de 40 días. Sin embargo, pese a obtener el alta de su internación, continuó padeciendo afecciones respiratorias, por lo que siguió siendo atendido por la demandada. Destaca que requirió atención de la accionada el 06/06/22, mediante TCL CD843587832, obteniendo el alta definitiva el 28/04/23.

Resalta que la información solicitada permitirá determinar si las afecciones médicas que hoy padece su mandante tienen relación con las afecciones que causaron el siniestro N°2351289.

Señala que, al negarse a hacer entrega de la información y documentación requerida, la demandada incurre en un actuar arbitrario e ilícito, valiéndose de su posición dominante en la relación, el cual no hace más que vulnerar los derechos de su mandante.

Finalmente, cita Derecho y ofrece prueba con su presentación.

II) Que, el 14 de noviembre de 2025, se tuvo por apersonado al Abog. Politti y por interpuesto el amparo informativo. A su vez, previo a proveer la demanda, se le solicitó que indique nosocomio público o privado donde fuera atendido el actor, a los fines de requerir también a esa institución el informe del art. 21 del CPC. De tal modo, tras la presentación del actor, el 28/11/25 se ordenó el traslado de la demanda a Prevención ART S.A., Centro de rehabilitación "CERET", SIR Rehabilitación, Centro Integral de Ortopedia y Traumatología, Nefrólogos Asociados S.R.L., CMIC.

III) Que, el 17 de diciembre de 2025, se apersonó el Abog. Leandro Quintans, en carácter de apoderado de Prevención S.A. ART, y contestó demanda oportunamente.

Presentó el informe exigido por el art. 21 del Código Procesal Constitucional de la provincia. En tal sentido, indicó que su mandante puso a disposición la información solicitada por el actor de manera oportuna.

Precisa que su representada notificó telefónicamente al actor - por medio de WhatsApp-, indicándole que las copias de los estudios médicos referidos al accidente laboral estaban a disposición en sus oficinas por un período de 30 días.

Destaca que el mensaje fue enviado el mismo día en que su mandante recibió el TLC remitido por el actor y que este nunca se presentó en las oficinas de la demandada. Entiende que esto no hace más que poner en evidencia la mala fe del actor en cuanto inicia la presente acción sin tener razones valederas, en cuanto podría retirar su historia clínica y documentación requerida de las oficinas de su representada.

Comenta que el mensaje fue remitido al teléfono celular denunciado por el actor ante su empleador cuando iniciaron las prestaciones médicas conforme surge de la historia clínica y declaración jurada remitida por aquél.

No obstante, cumpliendo la formalidad legal, acompañó copias de los únicos estudios que le realizaron al actor los prestadores de Previsión ART, precisando que esta no posee los originales, en cuanto todo fue enviado en formato digital.

En efecto, adjunto junto a su presentación la siguiente documentación en formato digital: Historia clínica completa, con los estudios de ecocardiograma Doppler color realizado en el Instituto de Cardiología SRL por la Dra. Pilar Haurigot, MP 8272; Informe de rehabilitación pulmonar realizado por el Lic. Sergio S. Rodríguez, Kinesiólogo y especialista en rehabilitación pulmonar; Espirometría y test de difusión de monóxido de carbono realizado por la Dra. Ana Stok, neumóloga; Asistencia en consultorio con el Dr. Marcelo Guillermo Olea, medico auditor de la ART; Interconsulta realizada con el Dr. Rodríguez Marquina Santiago, médico neumólogo; interconsulta realizada con la Dra. Rojas; FKT realizadas con el Lic. Figueroa Castellanos; Historia clínica del Sanatorio 9 de Julio; resultados estudio bioquímicos realizados en el Laboratorio Tucumán, orientación laboral realizada con la Lic. en terapia ocupacional Arce. Finalmente, resalta que dicha documentación fue puesta por su mandante a disposición del actor en fecha 16/10/25, conforme surge del mensaje de WhatsApp enviado al número de celular denunciado.

Precisa que los estudios originales realizados por el actor se encuentran resguardados en las instituciones donde efectivamente fueron realizados. Precisa que el actor, con su presentación de fecha 25/11/25, denunció que fue atendido en determinados nosocomios e instituciones que no son prestadores de su mandante, y que en muchas oportunidades los trabajadores son citados por los prestadores en instituciones para realizar la consulta médica pero no quiere decir que sean prestadores de la ART.

Al momento de contestar demanda, negó todos y cada uno de los hechos expuestos en el escrito de la demanda, como también la autenticidad de la documentación acompañada. También cuestiona la solicitud de estudios preocupaciones y anuales. Respecto a los primeros, sostiene que no se hayan en poder de su mandante en cuanto fueron realizados por el empleador y no por la ART. En cuanto a los estudios anuales, indica que en ningún momento su conferente realizó los mismos por intermedio de sus prestadores. Así, concluye que el actor pretende que se le entregue documentación inexistente.

Finalmente, cita Derecho y ofrece prueba con su presentación.

IV) Que, el 18 de diciembre de 2025, se presentó la Abog. Lucia López González, en carácter de apoderada de Nefrólogos Asociados SRL, y presentó el informe requerido en los términos del art. 21 del CPC.

Relata que su mandante es una empresa de nefrología que presta servicios de salud y que el actor fue atendido en forma puntual por consultorio externo. Indica que la empresa carece de todo vínculo con Prevención ART y no reviste el carácter de prestador. No obstante, en aras de cumplir con la manda judicial, precisa que se buscó en la base de datos administrativa y se obtuvo la información sobre la atención del actor por el profesional Rodríguez Marquina en consultorio externo. De tal modo, acompaña Informe Médico del 14/07/22 y del 22/09/22.

Destaca que su mandante nunca fue intimada, ni requerida o citada por la parte actora o la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, a fin de exhibir, informar o remitir documentación médica alguna vinculada al actor.

Finalmente, solicita se la exima del pago de costas en cuanto la acción intentada resulta improcedente respecto de su mandante.

V) Que, el 5 de marzo de 2025, se ordenó abrir la presente causa a prueba. En tal sentido, se proveyeron las pruebas ofrecidas por las partes y se libró oficio al Colegio de Abogados de Tucumán. Este, contestó lo solicitado el 13/03/26. Finalmente, el 20/03/26 se dictó el pase de autos a despacho para dictar sentencia.

CONSIDERANDO:

I) Que, el actor promueve la presente acción de hábeas data, prevista en el art. 43 de la Constitución Nacional, con el fin de obtener información respecto de aquellos datos personales concernientes a su salud que obren en los registros o archivos de la firma Previsión S.A. ART., a causa del accidente laboral sufrido el 21/05/21 (COVID-19). Precisa que solicitó dicha documentación mediante Telegrama Ley N°23.789 (N°287000069), pero no obtuvo respuesta alguna por parte de la accionada.

En su oportunidad, Previsión S.A. ART repele dicha pretensión y aduce que la información requerida fue puesta a disposición de la parte actora el mismo día en que recepcionado el telegrama remitido (16/10/25). En este sentido, señala la falta de razón valedera para accionar en cuanto le fue informado por vía WhatsApp que la documentación correspondiente a su historia clínica se encontraba a disposición para ser retirada de las oficinas de su mandante. Sin embargo, acompaña historia clínica, estudios médicos, informes y prestaciones referidos al Sr. Leguizamón Barazzutti, que obran en su poder y que fueron realizados por sus prestadores médicos.

Por otro lado, tras el traslado de la demanda, también se apersonó la firma Nefrólogos Asociados S.R.L., y presentó el informe requerido en los términos del art. 21 del CPC. Esta institución, pese a no haber sido intimada por la parte actora, acompañó aquellos informes médicos que figuraban en su base de datos administrativas respecto de la atención brindada al Sr. Leguizamón Barazzutti. No obstante, aclaró que no reviste carácter de prestador médico de Prevención ART y que el actor fue atendido por consultorio externo.

Por lo tanto, en el presente caso no se halla controvertida la calidad de trabajador en relación de dependencia del actor en la empresa Veracruz S.A. como tampoco la enfermedad que causó el infortunio laboral que dio origen al siniestro denunciado. Además, de las constancias del proceso

surge que el actor efectivamente intimó a Previsión S.A ART por Telegrama Ley N°23.789 a proveer la información referida a su salud -estudios médicos de la enfermedad profesional- en el plazo establecido por el art. 14 de la ley 25.326.

De esta manera, no está debatido aquí la información relacionada con la salud del trabajador sino la entrega - su oportunidad - misma de esa información una vez requerida. En concreto, lo controvertido es si el demandado se encontraba obligado a proveer dicha información y si la documentación que acompaña Previsión S.A. A.R.T. satisface el reclamo de la parte actora. A ese efecto será útil cualquier medio probatorio que evidencie - aún de manera indiciaria – que la ART no brindó el acceso adecuado y oportuno de la documentación médica concerniente al actor. Así, la carga legal impuesta por ley 24.557 y su dto. reglamentario, y los derechos que asisten a los pacientes conforme a la ley N°26.529, serán invocables contra la ART que razonablemente cuente o deba contar con esa documentación, lo que debe evaluarse en las puntuales circunstancias del caso.

II) Que la acción de Habeas Data fue acogida por nuestra Constitución Nacional y constituye un remedio urgente para exigir el acceso y conocimiento, y en su caso, la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de datos que consten en registros o bancos de datos públicos o privados, siempre y cuando estos sean erróneos, y existiera arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta de parte de estos establecimientos. En concreto, el Art. 43 de la Constitución Nacional establece que “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”.

El derecho de acceso a la información y toma de conocimiento de los datos personales está garantizado por la ley N°25.326; más aún cuando tiene que ver con un dato sensible relacionado a la salud del paciente. Dicha normativa reconoce dos derechos: 1. el acceso (art. 14) como la posibilidad de que toda persona tome conocimiento de los datos a ella referidos que consten en registros bancos de datos públicos o privados como de su finalidad; y 2. El derecho a la supresión, rectificación o actualización (art. 16), en caso de falsedad, inexactitud o discriminación.

A su vez, la Ley N°25.326 establece, en su artículo 14, el derecho de acceso a la información. Así, el inc. 1) dispone que: “El titular de los datos, previa acreditación de su identidad tiene derecho a solicitar y obtener información de sus datos personales incluidos en los bancos de datos públicos, o privados destinados a proveer informes”; mientras que el inc. 2) dice: “El responsable o usuario debe proporcionar la información solicitada dentro de los diez días corridos de haber sido intimado fehacientemente”.

El art. 15 de la misma ley, establece sobre el contenido de la información, en su inc. 1 que: “La información debe ser suministrada en forma clara, exenta de codificación y en su caso acompañada de una explicación, en lenguaje accesible al conocimiento medio de la población, de los términos que se utilicen” y en el inc. 2 que: “La información debe ser amplia y versar sobre la totalidad del registro perteneciente al titular, aun cuando el requerimiento sólo comprenda un aspecto de los

datos personales”. Finalmente, en igual sentido, el art. 67 de la ley 6944 CPCT dispone que cualquier persona humana “puede reclamar por vía de amparo una orden judicial para conocer las informaciones relativas a su persona que consten en registros o bancos de datos de entidades públicas, o privadas destinadas a proveer informes”.

Sentado ello, puede sostenerse que la acción de Habeas Data busca la protección de manera inmediata de una diversidad de derechos (a la verdad, a la autodeterminación informativa, a la intimidad, a la privacidad, a la voz, a la imagen, a los valores familiares, al honor, al patrimonio, entre otros). La intervención jurisdiccional prevista en la normativa nacional bajo la denominación habeas data se refiere a la necesaria intervención de la magistratura en aquellos casos en que resulta necesaria la obtención compulsiva de algún documento o información que se encuentra en poder de una de las partes de una determinada relación jurídica y que es requerido por la otra.

Por su parte, no puede soslayarse lo dispuesto en el art. 4 de ley N°25.326, en cuanto se refiere a la calidad de los datos y dispone que el responsable del archivo se comprometa para que la información almacenada sea adecuada y pertinente, esté al día, sea exacta y verdadera y en lo posible completa. Este aspecto adquiere relevancia en el caso, toda vez que se trata de archivos que contienen información relacionada con intervenciones médicas, tratamientos, etc., referidos directamente a la salud del accionante. De tal modo, estamos ante datos vinculados con un aspecto personalísimo como es la salud de una persona, razón por la cual el acceso a la misma no puede serle vedado a su titular, sino, que por el contrario debe verse favorecido con la mayor prontitud posible, ya que puede estar encaminado a la prevención y/o curación del paciente, siendo que la demora en proporcionárselo podría razonablemente acarrear consecuencias a la postre perjudiciales y/o insalvables. Y al encontrarse involucrada la salud de las personas es preciso actuar en la faz preventiva, tanto en el ámbito de la ciencia médica como jurídica (Art. 1710 y cctes. del CCCN).

En este orden de ideas, desde el momento en que la demandada registra cualquier dato de sus asegurados o de dependientes de estos, en relación con su actividad de aseguradora, se convierte en responsable del archivo y está obligada a suministrar la información al titular de los datos, debiendo proceder con absoluta diligencia y premura (art. 1725 y cctes. del CCCN), arbitrando todos los medios o desplegando las actividades que razonablemente sean conducentes para cumplir con su obligación legal de informar de manera adecuada, clara y oportuna.

III) Que el actor interpone la presente acción de hábeas data en ejercicio de su derecho de conocer los datos referidos a la contingencia laboral sufrida y, por lo tanto, solicita que se le entreguen copias del legajo/siniestro N°2351289, estudios de condiciones y medio ambientes de trabajo e historia clínica completa, estudios realizados, instituciones y médicos intervinientes, diagnósticos y patologías arribadas, terapias aconsejadas, estudios resultantes y todo lo relativo a ello de manera completa.

Al respecto, la finalidad inmediata de una historia clínica es registrar la evolución y los tratamientos brindados a un paciente a los efectos de su mejor atención, y, estimo que la misma se adecua al concepto de “provisión de informes” utilizado en las Constituciones Nacional y Provincial. Por la naturaleza misma de una historia clínica (relevamiento de tratamientos, evolución de la salud de un paciente, diagnósticos, etc.) ella está destinada a su puesta en conocimiento, en caso de ser requerida. Por lo tanto, debe estar a disposición, tanto del paciente, cuando la prudencia lo aconseje, como de sus representantes. En caso de negarse la información requerida, se podría ver afectada la protección de la salud, derecho de raigambre constitucional (art. 42 CN) y convencional (Art. 75 inc. 22).

En este sentido, la defensa esgrimida por la demandada referida a que, ante el requerimiento del actor, se le contestó por mensaje vía WhatsApp no puede tener cabida, particularmente si se tiene en cuenta que en el presente proceso no se demostró de forma fehaciente que el número denunciado perteneciera o pueda ser atribuido al actor al momento de los hechos, es decir, no se pudo corroborar de manera adecuada la autenticidad de la comunicación.

Asimismo, tiene dicho la Excma. Cámara Civil y Comercial Común, Sala 2, que “conforme a la jurisprudencia y doctrina que comparto, la relación entre un trabajador y la ART es de consumo, por lo que resulta aplicable la normativa de protección al consumidor. Es decir, según el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC), la información solicitada por el usuario debe proporcionarse en soporte físico, a menos que él opte expresamente por otro medio de comunicación alternativo ofrecido por el proveedor” (CCCTuc., Sala 2, Sent. N°19, 12/12/2025). En efecto, la ART, en su carácter de proveedora de un servicio y organizadora de un sistema y estructura empresarial, se encontraba en mejores condiciones de reunir la información solicitada y proporcionársela al actor de manera fehaciente, quien por el contrario no mantiene vínculo jurídico contractual u obligacional alguno con los profesionales en quienes la aseguradora ha tercerizado parte de sus obligaciones legales. En consecuencia, al encontrarse implicadas situaciones que hacen nada menos que a la salud y dignidad de las personas (art. 52 y cctes. del CCCN), en la especie, de un trabajador como sujeto de preferente tutela constitucional (Art 14 bis de la CN), se encontraba a cargo de la demandada arbitrar todos los medios conducentes para reunir con esa información y/o documentación y ponerla a disposición del trabajador con la prematura que la situación impone, notificándolo de manera fehaciente.

Al respecto, "Las cartas documentos y telegramas son comunicaciones fehacientes que no requieren la presencia de un escribano público en el acto de imposición y entrega, y que brindan certeza acerca de las fechas de admisión y de entrega de los envíos, y que el Correo Oficial de la República Argentina S.A. resulta fedatario respecto a que el envío entregado al destinatario es copia fiel del ejemplar en archivo y el obrante en poder del remitente" (cfr. CSJT, Toledo Lautaro Roberto vs. Arzobispado de Tucumán y/o Arzobispado de la Provincia de Tucumán s/ Cobros, Nro. Sent: 228 Fecha Sentencia 10/04/2012). En consecuencia, corresponde tener a la parte demandada como intimada en forma extrajudicial a hacer entrega de la documentación médica del actor (TCL CD 287000069), mientras que no corre la misma suerte la comunicación vía WhatsApp alegada por la demandada.

IV) Que, del acervo probatorio de autos, surge que la demandada acompañó documentación médica solicitada en la demanda, excepto los pedidos de exámenes preocupacionales e informes de seguimiento anual. Sin embargo, de su simple lectura y tal como fue advertido por la parte actora, dichos instrumentos no cumplen con el estándar indicado previamente, referido a la claridad, legibilidad y accesibilidad que dicha documentación debe reunir. En este sentido, se observan copias de fotografías tomadas de un modo que dificultan una lectura adecuada de los indicadores e informes médicos que constituyen la historia clínica del actor, obstaculizando su objeto primordial correspondiente al derecho a conocer cabalmente las intervenciones realizadas, diagnósticos, tratamientos y estado de salud integral del paciente luego del incidente acaecido.

En el marco delineado hasta aquí, tampoco puede tener cabida la defensa articulada por la demandada respecto a que los originales se encuentran resguardados en las instituciones y con los profesionales que intervinieron en la realización de los estudios del actor, en cuanto la aseguradora, si bien se sirve de la información médica obtenida por medio de los terceros a quienes delega la realización de los estudios médicos, de igual forma debe poner a disposición de su titular los datos médicos obtenidos. Así, se ha dicho que "quien invoca una causal eximente de responsabilidad,

como la imposibilidad de cumplimiento por el hecho de un tercero, tiene la carga procesal ineludible de acreditarla de manera fehaciente. La mera manifestación dogmática de que 'no se cuenta con otra documentación' o que 'esta en poder del cesionario' es a todas luces insuficiente" (CCCTuc., Sala 1, Sent. 830, 11/11/2025).

En este contexto, no es posible soslayar que la aseguradora se mostró reticente a cumplir con los derechos y garantías del trabajador beneficiario, toda vez que, según fue acreditado, no entregó la información requerida en el momento oportuno, viéndose el actor obligado a iniciar el presente amparo para lograr su cometido. En esta misma tesitura, al contestar demanda, la aseguradora omitió poner a disposición la totalidad de la información en su poder o a realizar las gestiones necesarias para la obtención de la documentación requerida por el actor.

Sobre este punto, la Excma. Cámara Civil y Comercial Común, Sala II, afirmó que: "la demandada no puede desentenderse de su obligación por el solo hecho de haber recurrido a terceros (médicos, sanatorios, empresas dedicadas al diagnóstico por imágenes, etc; todos ellos prestadores de la ART demandada) para la realización de los estudios/prácticas referidos a las personas a las que asegura en la actividad profesional que despliega. A todo evento, la demandada, en su carácter de proveedora de un servicio y organizadora de un sistema y estructura empresarial, era la que se encontraba en mejores condiciones de reunir esa información y proporcionársela al actor, no pudiendo, ante su requerimiento, escudarse argumentando que no cuenta con la información que se le solicita, en tanto el trabajador no mantiene vínculo jurídico contractual u obligacional alguno con los profesionales en quienes la aseguradora ha tercerizado parte de sus obligaciones legales desde el momento en que la demandada registra cualquier dato de sus asegurados o de dependientes de los mismos, en relación a su actividad de ART, se convierte en responsable del archivo y está obligada a suministrar la información al titular de los datos, debiendo proceder con absoluta diligencia y premura (cfr. art. 902 y cc CC, arts. 1725 y cc CCCN) arbitrando todos los medios o desplegando las actividades que razonablemente sean conducentes para cumplir con su obligación legal de informar en tiempo y forma. En definitiva, es la ART quien se encuentra en mejores condiciones de reunir la información requerida y proporcionársela al actor; como, asimismo, que, a tal efecto, debió proceder con absoluta diligencia y premura arbitrando todos los medios o desplegando las actividades que razonablemente sean conducentes para cumplir con su obligación legal de informar en tiempo y forma" (CCCTuc., Sala 2, Sent. 854, 04/12/24).

Por lo tanto, corresponde hacer lugar a la acción de amparo interpuesta, condenando a la parte demandada a que, en el plazo de cinco días de quedar firme la presente, arbitre todos los medios necesarios a los fines de hacer efectiva la entrega al actor de los originales o copias legibles de la totalidad de la documentación del siniestro registrado con el N°2351289, en especial historia clínica, y todo otro dato referido a su salud, profesionales intervinientes, estudios médicos efectivamente realizados, diagnósticos, tratamientos, traumas, enfermedad, patologías y demás condiciones junto a las imágenes de diagnóstico existentes.

V) Que, teniendo en cuenta que la firma Nefrólogos Asociados SRL: i) presentó el informe del art. 21 del CPC oportunamente; ii) acompañó los informes médicos obrantes en su archivo administrativo (Informe Médico del 14/07/22 y del 22/09/22); iii) no ha sido intimada extrajudicialmente por la actora como tampoco por la demandada a presentar documentación; iv) que la documentación presentada en autos no ha sido cuestionada ni desvirtuada en el presente proceso; v) que no presenta el carácter de prestador de servicios de Previsión S.A. ART; corresponde concluir que dicha institución ha dado cabal cumplimiento con la solicitud de entrega de la documentación médica en su poder, por lo que la cuestión a resolver deviene, respecto de ella, en abstracto.

VI) Que, teniendo en cuenta el resultado arribado y la actitud asumida por las partes en el pleito, las costas serán impuestas en su totalidad a la firma Previsión ART S.A. , en virtud de la aplicación del principio objetivo de la derrota (Art. 61 del CPCCT).

VII) De conformidad a lo establecido por el art. 20 de la Ley N° 5480, corresponde proceder a regular honorarios a los letrados apoderados intervinientes, Politti Marcelo Alejandro (apoderado actor), Quintans Leandro (apoderado Previsión S.A. ART) y Lucía López González (Apoderada Nefrólogos Asociados S.R.L).

A fin de determinar la base regulatoria y en atención a que la presente acción tienda la protección de derechos no susceptibles de apreciación pecuniaria, a los efectos de la regulación de honorarios tengo en cuenta los parámetros que fijan los Art. 15 y 38 in fine de la Ley n° 5480.

Con ello en mente y de conformidad con lo normado en la última parte del art. 38, corresponde que los emolumentos profesionales a regularse a los letrados Marcelo Alejandro Politti y Leandro Quintans, se fijen en el valor equivalente a una consulta escrita dispuesta por el Colegio de Abogados de Tucumán a la fecha del dictado de esta sentencia (\$620.000) con más el 55% (art. 14 ley 5480).

Respecto a la letrada Lucía López González, merituando su actuación en los presentes autos, se tiene en cuenta lo expuesto por calificada doctrina, "en cuanto a la posibilidad de perforación de los honorarios mínimos por parte del juez por aplicación del art. 13 de la Ley N° 24.432 que debe tenerse en cuenta que los umbrales retributivos fijos consagrados por la ley arancelaria han sido establecidos con la intención de dignificar el ejercicio de la profesión, fijando un salario de honorarios básico para las distintas categorías de causas del que no es dable descender, cualquiera sea el monto del proceso; con lo cual la regulación por debajo de esos mínimos reviste carácter excepcional y está dirigida a los juicios de montos muy elevados" (Pesaresi, G. M., "Actualidad en materia de honorarios", 1/2008, JA 09/7/2008; JA 2008-III-753).

Al respecto, la CSJT ha dicho que "La ley autoriza a regular honorarios por debajo de dichos mínimos legales, reconociendo a los jueces la facultad de prescindir de ellos, cuando concurren circunstancias tales como: actuar la actora con beneficio para litigar sin gastos, que la labor profesional careció de entidad suficiente, de trascendencia y complejidad, por lo que los honorarios deben adecuarse a justos y razonables límites, de modo que respondan a la tarea efectivamente cumplida (CSJTuc., sentencia N° 842, 18/9/2006, "Robles Vda. de Ríos Marta Gabriela vs. Gómez Víctor Hugo s/ Daños y perjuicios"). En función de ello la facultad morigeradora prevista en el art. 13 de la Ley N° 24.432 debe ser ejercida con suma prudencia y criterio restrictivo, toda vez que introduce un factor de incertidumbre en las regulaciones de honorarios que no se adecua a las exigencias de la seguridad jurídica. De allí que sólo corresponda efectuar regulaciones por debajo de los mínimos arancelarios en aquellos supuestos en que, por la entidad de las tareas cumplidas, la sujeción estricta a dichos mínimos conduzca a honorarios exorbitantes, desproporcionados con relación al mérito, calidad e importancia de los trabajos realizados (conforme CSJTuc., sentencia N° 840, 22/10/2004, "E.D.E.T. S.A. vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ Nulidad de acto administrativo"), en la que dispuso la morigeración de los honorarios calculados conforme a las normas arancelarias, en mérito a que la demandada condenada en costas había sido declarada en emergencia económica. Su aplicación se justifica en casos excepcionales, de una irrazonabilidad evidente y manifiesta (Luqui, Roberto Enrique, Honorarios de abogados el art. 13 de la Ley N° 24.432, La Ley, 1999-E, 1067)" (CSJT, Sent. N°849, 28/06/2017)

Por lo tanto, atendiendo a la entidad de la labor cumplida por la letrada mencionada, cuya única actuación consistió en contestar el informe del art. 21 del CPC, se considera adecuado la reducción

del monto mínimo fijado por la ley arancelaria local y fijar sus honorarios en el valor equivalente a la mitad del monto establecido para una consulta escrita dispuesta por el Colegio de Abogados de Tucumán a la fecha del dictado de esta sentencia (\$620.000) con más el 55% (art. 14 ley 5480).

Por último, se hace constar que los honorarios regulados en este pronunciamiento deberán abonarse conforme lo dispuesto por el Art. 23 de la Ley 5480, dentro de los diez (10) días de quedar firme la presente resolución.

Por ello,

RESUELVO:

1) HACER LUGAR a la acción de amparo informativo (habeas data), iniciada por el Sr. Víctor Manuel Leguizamón Barazzutti, DNI N°28877575, en contra de PREVISIÓN ART S.A., según se considera. En consecuencia, **ORDENAR** a la firma PREVISIÓN ART S.A. a que, en el plazo de cinco (5) días de quedar firme la presente resolución, arbitre todos los medios necesarios a los fines de hacer efectiva la entrega al actor de los originales o copias informáticas legibles y accesibles, de la totalidad de la documentación del siniestro registrado con el N°2351289, historia clínica y todo otro dato referido a su salud, especialmente los referidos a los profesionales médicos intervinientes, a estudios médicos efectivamente realizados, diagnósticos, tratamientos, traumas, enfermedad, patologías y demás condiciones junto a las imágenes de diagnóstico existentes.

2) IMPONER COSTAS a la demandada Previsión ART S.A. (Art. 61 Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán), según se considera.

3) REGULAR HONORARIOS al Abog. Marcelo Alejandro Politti, apoderado del actor, y al Abog. Leandro Quintans, apoderado de la demandada, en la suma de \$961.000 (pesos novecientos sesenta y un mil), según se considera.

4) REGULAR HONORARIOS a la Abog. Lucía López Gonzalez, apoderada de la firma Nefrólogos Asociados S.R.L., en la suma de \$480.000 (pesos cuatrocientos ochenta mil), según se considera.

5) Se hace constar que los honorarios regulados en este pronunciamiento deberán abonarse conforme lo dispuesto por el Art. 23 de la Ley 5480, dentro de los diez (10) días de quedar firme la presente resolución.

6) COMUNÍQUESE a la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de Tucumán (art. 35, ley 6059).

HÁGASE SABER.^{FEB}

Dr. Daniel Lorenzo Iglesias

-Juez Civil y Comercial Común de la XVIa Nom.-

Certificado digital:

CN=IGLESIAS Daniel Lorenzo, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 20253010593

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>.